CONTRA EL “ENEMIGO INVISIBLE”: ¿QUEDARSE EN CASA? ¿Y DESPUÉS?*

*Soledad Nión Celio
Agustín Juncal Pérez*

Introducción

Para contextualizar la situación institucional del Uruguay al momento de la confirmación de los primeros casos de coronavirus conviene repasar brevemente el proceso de transición de gobierno. Unos meses antes, el 24 de noviembre de 2019, Luis Lacalle Pou del Partido Nacional -en coalición con otros cinco partidos políticos- se impuso en segunda vuelta en las elecciones nacionales a Daniel Martínez del Frente Amplio. Con ello se ponía fin a quince años de “era progresista” en Uruguay con las administraciones de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y José Mujica (2010-2015). De ese modo, entre el 25 de noviembre de 2019 y el 1 de marzo de 2020 se inició un proceso de transición pautado por tres cuestiones: primero, un cambio de orientación política que apunta a un modelo económico notoriamente neo-liberal; segundo, escaso diálogo entre autoridades salientes y entrantes; y tercero, la difusión del contenido de un proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) que Lacalle Pou manifestaba enviaría los primeros días de marzo cuando asumiera su gobierno². Cuando

*DOI – 10.29388/978-65-86678-07-9-0-f.191-202

¹ El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una preocupación quienes escribieron el artículo, no obstante, no hay acuerdo entre lingüistas sobre la manera de cómo hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga que supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, se optó por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones representan tanto a varones como mujeres.

² El procedimiento de una ley de urgente consideración está regulado por el artículo 168 de la Constitución de la República. A grandes rasgos, se reducen los plazos para el debate parlamentario (90 días en total) y se exige una mayoría especial para dejar

la pandemia llegó la sociedad uruguaya debatía abiertamente el anteproyecto de LUC, cuyo contenido se difundió en diversos medios de prensa a fines de enero.

Con casi 500 artículos la LUC propone la modificación de una amplia cantidad de temas: seguridad pública, inteligencia, educación, economía y empresas públicas, eficiencia del Estado, sector agropecuario, relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social y salud, vivienda, modificaciones al código civil y otras disposiciones³. Por otra parte, el Frente Amplio y el PIT-CNT⁴ consideraron inaceptable la denominada “Ley ómnibus” que, en tiempos extraordinarios, intenta modificar importantes aspectos económicos y sociales del país. De igual modo, muchos actores sociales y la propia Universidad de la República (Udelar) se han manifestado en contra de tratar la LUC en tiempos de pandemia, donde la protesta y las emergencias correrían por otros caminos⁵. Luego de modificaciones en su redacción que incluye desgloses e incorporaciones que continúan actualmente, el proyecto ingresó al Parlamento nacional el 28 de abril bajo acusaciones de “inconstitucionalidad” por parte de la oposición. En tal sentido, el presente artículo pretende analizar los impactos del Covid-19 en las dimensiones educativa, laboral, productiva y social tomando en cuenta este contexto particular de cambio de autoridades políticas y conflictividad social en Uruguay.

sin efecto su carácter urgente (3/5 de los integrantes de cada cámara). Transcurridos 90 días y de no alcanzarse los votos contrarios al proyecto (o a determinados artículos) el texto queda aprobado.

³ Fue conocida el 22 de enero de 2020. Ver: <https://www.subrayado.com.uy/acceda-aqui-al-texto-completo-la-ley-urgente-consideracion-del-gobierno-entrante-n591869> (17-5-2020)

⁴ Es la central sindical de Uruguay cuya sigla refiere a Plenario Intersindical de Trabajadores Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT).

⁵ Ver por ejemplo manifestaciones del rector de la Universidad Pública del Uruguay, <http://udelar.edu.uy/rector/2020/04/14/las-urgencias-en-tiempos-de-pandemia/> (18-5-2020)

Educación por plataformas virtuales

A diferencia del vecino rioplatense, el gobierno uruguayo no tomó la resolución de volcarse hacia el confinamiento obligatorio como medida sanitaria y apeló a la “responsabilidad de la ciudadanía”, actitud que mantiene hasta hoy. Sin embargo, luego de la confirmación de los primeros casos sintomáticos de Covid-19 el gobierno y las autoridades de la educación pública resolvieron rápidamente realizar el tránsito de clases presenciales a clases virtuales en todos los niveles de enseñanza. Así, alrededor de 800 mil estudiantes de educación primaria, secundaria y terciaria pasaron a formatos virtuales de aprendizaje⁶.

A grandes rasgos puede mencionarse que la educación privada primaria y secundaria -con algunas salvedades según los casos- realizó un pasaje de clases presenciales a clases virtuales. En la educación pública es importante separar las decisiones de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que rigen la educación pública primaria, secundaria y terciaria no universitaria respecto a la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (UTEC). En el caso de ANEP la posibilidad de garantizar la “continuidad educativa” de forma virtual (en particular, en el ciclo de primaria) se debe a la política pública implementada por el Plan Ceibal desde 2007 que se basa en que cada niño o niña tenga una computadora y la cobertura de internet en el 100% de las escuelas públicas de primaria. De igual modo está desarrollada la plataforma Crea que permite a docentes gestionar la educación a distancia⁷.

Ahora bien, el nuevo contexto de coronavirus presenta algunas diferencias que merecen ser señaladas. En primer lugar, que a pesar de los altos niveles de conectividad y penetración de internet en los hoga-

⁶ Ver: Failache, E; Katzkowicz, N; y Machado, A. (2020) *La educación en tiempos de pandemia. Y el día después*. Disponible en: http://fcea.edu.uy/images/dto_economia/Blog/La_educaci%C3%B3n_en_tiempos_de_pandemia._Y_el_d%C3%ADa_despu%C3%A9s.pdf

⁷ Ver <https://www.ceibal.edu.uy/es/crea>

res uruguayos se identifican notorias desigualdades según territorios y estratos sociales⁸. Esto plantea diferentes escenarios del vínculo educativo entre docentes y estudiantes debido a las posibilidades de conexión a internet que se vinculan notoriamente a los recursos económicos de los hogares. Por ejemplo, situaciones tanto en estudiantes como en docentes con acceso a plataformas y condiciones materiales respecto a otros que no cuentan con dicho acceso para el proceso educativo virtual (Ver: Failache, Katzkowicz y Machado, 2020). También el escenario de educación virtual planteado desconoce la situación de niños y niñas en términos de sus condiciones materiales y familiares (situación socioeconómica y/o nivel de hacinamiento por mencionar dos) que propicien o no el aprendizaje significativo. Esta virtualización permite en el mejor de los casos suplir los contenidos curriculares, pero no permite llevar adelante otras funciones como por ejemplo de alimentación, tan significativa para muchos niños, niñas y adolescentes de contextos desfavorables.

En segundo lugar, desde el 22 de abril se fijaron excepciones a estas medidas hacia las escuelas rurales⁹ con el anuncio del gobierno para el retorno a clases presenciales con “asistencia voluntaria”, bajo el cuestionamiento tanto del sindicato de magisterios (FUMTEP) como de educación secundaria (ADES). De las 543 escuelas rurales que habían retomado actividades, algunas presentaron inconvenientes y volvieron a suspender las aulas presenciales. En tercer lugar, destacar las desigualdades que en términos de tareas de cuidados se presentan en los hogares a medida que la actividad económica se va reanudando por parte de los adultos con el retorno a sus trabajos mientras las clases continúan en modo virtual. En todos estos casos, maestras y docentes son convocados en nombre de su compromiso educativo, sin mencionarse sus propias dificultades personales, materiales y/o profesionales para garantizar la continuidad de la labor.

⁸ Según datos de Uruguay XXI. Ver: <https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/articulo/uruguay-una-revolucion-tecnologica-en-poco-mas-de-una-decada/> (Consultado el 17 de mayo de 2020).

⁹ Salvo las de Montevideo, Canelones y parte de las de Maldonado.

Por otra parte, el principal centro de enseñanza, investigación y extensión universitaria del país, la Udelar, ajustó sus actividades a las medidas sanitarias y el 31 de marzo decidió pasar todas sus actividades a modo virtual durante el resto del semestre lectivo. Asimismo, muchos investigadores y algunos fondos de financiación se volcaron a la generación de conocimiento relacionado al Covid-19. En lo que particularmente refiere a la enseñanza universitaria, se adecuaron todos los cursos para realizarse en plataformas virtuales (Zoom o Webex) y la utilización del entorno virtual de aprendizaje (Eva). Luego de un relevamiento realizado entre los estudiantes, la Udelar intentó garantizar la continuidad educativa por medio de la asignación de becas (computadoras y conexión a internet) destinadas a estudiantes de menos recursos. La contracara de este fenómeno se encuentra en la docencia que permite visualizar varias desigualdades en la carrera académica. En efecto, además de incrementar las cargas docentes en el traslado del trabajo del aula al hogar, permite hacer visibles diferencias de género respecto a determinados roles en la sociedad, por ejemplo, en el cuidado de personas dependientes.

Trabajo y sectores productivos

La situación laboral a partir de las medidas sanitarias presenta por lo menos cuatro situaciones diferentes. En primer lugar, existe una magnitud importante de trabajadores que han perdido sus fuentes de ingreso, ya sea por ser trabajadores informales o cuentapropistas. Dentro de esta categoría se incluyen tanto aquellos trabajadores más clásicamente vulnerables, que vivían de las “changas”, como trabajadores que han sido impactados por las medidas de distanciamiento social y el cese de actividades que concentren público (músicos, actores, entre otros). Este tipo de situaciones inmediatamente ven interrumpidos sus ingresos y deben hacer frente a la situación, muchas veces apelando a las medidas sociales estatales de emergencia, pero también a la solida-

ridad comunitaria (por ejemplo, las ollas populares, canastas de alimentos, etc.).

En este grupo de trabajadores, tiene un lugar especial el trabajo doméstico (cuya formalidad fue reconocida por la Ley 18.065 de 2006) donde se registran casos de empleadores que dejaron de pagar remuneraciones (jornal, semanal y/o mensual) por causa de que las trabajadoras no concurrían a su lugar de trabajo. Sin embargo, con ello se incumple un convenio laboral firmado por el sector empleador y el Sindicato Único de Empleadas Domésticas (SUTD) en 2010 que establece que el empleador debía remunerar a sus trabajadoras toda vez que, por diferentes razones, decidan no convocarlos/as a trabajar en los días acordados¹⁰.

En segundo lugar, las cifras sobre trabajadores en seguro de paro alcanzan unas 150 mil personas. Parte de las medidas del gobierno ante la epidemia fueron generar un subsidio por desempleo especial (más flexible) para alcanzar a más cantidad de trabajadores¹¹. En tercer lugar, se encuentran quienes no han dejado de asistir a sus lugares de trabajo: salud, supermercados, servicios esenciales estatales, policía, personal de cárceles, sector agropecuario (incluso con comienzo de algunas zafras, por ejemplo, soja y caña de azúcar). Vale mencionar que en muchos casos no existen protocolos de prevención adecuados. Por ejemplo, el caso del personal embarcado en la pesca industrial donde las condiciones laborales y de vida se entrecruzan (con graves falencias) que genera un reclamo especial en términos del protocolo de sanidad necesario, sin tener respuestas concretas ni del Ministerio de Salud Pública, ni del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por otra parte, un caso particular se encuentra en el sector de la construcción y afines que cuenta con una larga tradición de negociación entre los actores laborales donde se acordó una licencia especial y se detuvieron las actividades en marzo. El 13 de abril, se retomó la actividad

¹⁰ Artículo 11 del convenio diciembre 2010. https://www.bps.gub.uy/bps/file/11799/1/acta_convenio_colectivo_servicio_domestico_17-12-010.pdf - 18-5_2020)

¹¹ Disponible para su consulta en <https://www.bps.gub.uy/bps/file/16875/1/resolucion-163-020.pdf> (18-5-2020).

tras varios días de negociación entre el Estado, las cámaras empresariales y el Sindicato Único de la Construcción y Afines (SUNCA) donde se dispusieron una serie de medidas sanitarias obligatorias para trabajadores y dispositivos de control (medición aleatoria de temperatura, distanciamiento, uso de mascarillas, test de Covid-19).

En cuarto lugar, tras los anuncios del 13 de marzo algunos trabajadores y trabajadoras fueron mandados a realizar trabajo desde casa. En ese sentido, el llamado “teletrabajo” se impone discursivamente como una ventaja para quienes atraviesan esta situación, no obstante, el teletrabajo supone la voluntariedad, las condiciones adecuadas para trabajar y las competencias de comunicación, organización y digitales adecuadas. En el marco del Covid-19 el trabajo remoto netamente no es opción para el trabajador, ya que a cambio de poder seguir con su actividad debe asumir esta nueva forma, utilizando recursos informáticos, energéticos y de tiempo propios para cubrir la misma productividad. Ahora bien, la productividad en si misma podría ser una meta imposible de lograr porque se realiza en contexto de incertidumbre por una pandemia y de aislamiento social, lo que ya de por sí son estresores nuevos. A esto pueden sumarse otras situaciones. Por ejemplo, trabajadores/as con personas dependientes a cargo (niños, adolescentes, adultos mayores, con problemas de salud o con algún tipo de discapacidad) donde el desafío es aún mayor porque debe asumir el mismo trabajo bajo una situación familiar totalmente atípica, de convivencia con otras personas a las que debe cuidar y garantizar la reproducción de la vida doméstica¹².

De igual modo, debe compartir esos recursos informáticos, banda ancha, espacios de trabajo y tiempos con los otros miembros del hogar que estén trabajando también remotamente o asistiendo a la educación virtual. La situación se podría complejizar aún más teniendo en cuenta cuestiones como la cantidad y las edades de las personas en situación de dependencia, los hogares monoparentales, etc. En tal

¹² Una de las recomendaciones no atendidas en estos casos sería renegociar las metas de trabajo adaptadas a la situación actual al mismo tiempo que explicitar los horarios y garantizar el derecho a la desconexión de estas personas.

sentido, pareciera que no hay lugar para la manifestación ante este nuevo contexto de sobrecargas de funciones (dentro y fuera del hogar) porque se impone un discurso de “privilegio de trabajar desde el hogar” ante la crisis sanitaria y socioeconómica. Así, los efectos en la salud (aislamiento, jornadas laborales más largas, estrés, déficit de competencias, desdibujamiento del trabajo y la vida familiar, insomnio, ausencia de espacios ergonómicamente pensados para trabajar, entre otros) se colocan en un segundo plano¹³. En definitiva, estas cuestiones no hacen más que reforzar inequidades de género preexistentes, como muchos estudios y analistas advierten¹⁴.

La “solidaridad” del gobierno y la movilización social

Los primeros días de abril el Poder Ejecutivo envió una propuesta para crear el “Fondo solidario Covid-19” (sancionada como Ley 19.874 promulgada el 8 de abril) con el objetivo de establecer un impuesto a los funcionarios públicos que permita financiar la atención pública de la emergencia sanitaria (artículo 1). Se fijaron cuatro franjas de contribución (artículo 3) según salarios líquidos de los funcionarios públicos a partir de los 80 mil pesos (que equivale a poco más de 1.800 dólares)¹⁵. Esta norma genera importantes críticas desde la izquierda porque solamente se nutre de impuestos a funcionarios públicos y de donaciones del sector privado, pero sin gravar al capital privado. Por

¹³ Los efectos sobre la salud y seguridad de las personas que trabajan (presencial o remotamente) han sido por ejemplo uno de los temas centrales el pasado 28 de abril, día internacional de la seguridad y salud en el trabajo, y recogido en un documento especialmente elaborado por la OIT: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_741832/lang-es/index.htm (18-5-2020)

¹⁴ Ver: por ejemplo <http://www.ine.gub.uy/documents/10181/340523/Uso+del+Tiempo+y+Trabajo+No+Remunerado+2013/5c21b33e-ddde-41cd-a638-4d73e3f75a8d>, <https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2019/06/25/Desigualdades-de-g%C3%A9nero-en-la-ciencia-acad%C3%A9mica-un-tema-molesto>, y las elaboraciones recientes <https://cienciassociales.edu.uy/noticias/la-romantizacion-del-quedate-en-casa/>

¹⁵ Ver detalles en artículo 4 de Ley 19874. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19874-2020>

otra parte, se genera en un escenario donde el gobierno ha realizado una apelación a la “solidaridad” pero cuyas acciones parecen apuntar hacia otra dirección. Muestras de ello fueron los “festejos” del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (Ing. Agr. Carlos María Uriarte) sobre el aumento sostenido del dólar desde la asunción del nuevo gobierno: desde 38,60 pesos (1 de marzo), 41, 60 pesos (10 marzo) 45,87 pesos (20 de marzo) ubicándose en torno a 44 pesos entre abril y mayo¹⁶; el cambio de actitud sobre las tarifas de empresas públicas (cuando en octubre en plena campaña electoral se prometían a bajar, pero en marzo fueron drásticamente aumentadas por encima de la inflación); y el ya mencionado envío al Parlamento de la LUC.

Además, se han modificado notoriamente las posibilidades de las manifestaciones públicas en un contexto de fuerte conflictividad social. Así, dos movilizaciones emblemáticas tuvieron que cambiar su formato ante las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria: el acto del 1 de Mayo convocado por el PIT-CNT y la “marcha del silencio” que se organiza cada 20 de mayo de forma ininterrumpida desde 1996 como símbolo de la lucha por “verdad, justicia, memoria y nunca más” sobre los detenidos-desaparecidos durante la última dictadura civil militar (1973-1985).¹⁷ Vale señalar también que ambas movilizaciones agudizaron un nuevo conflicto con el gobierno al decidir no otorgarles las cadenas de radio y televisión para dichas conmemoraciones.

Por último, el 23 de marzo en conferencia de prensa, ante la pregunta sobre el aumento de femicidios y la situación de aislamiento social recomendada, el Presidente Lacalle Pou mencionó que “lamentablemente son un efecto colateral del confinamiento”. A esto se agregan las recientes declaraciones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, comparando el número de femicidios con los abigeatos. Esto

¹⁶ Ver: declaraciones del ministro de Ganadería “era lo que ansiábamos”. Disponible en: <https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/3/uriarte-sobre-el-aumento-del-dolar-era-lo-que-ansiabamos/> (Consultado 18-5-2020)

¹⁷ La fecha recuerda los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruíz, Rosario Barredo y William Whitelaw ocurridos en Buenos Aires (Argentina) el 20 mayo de 1976 en el marco del “Plan Condor”.

supuso una movilización en redes sociales y prensa de los movimientos feministas en respuesta a estos dichos, a lo que se sumaron reclamos contra la Vicepresidenta Beatriz Argimón (autodefinida como militante feminista) y por los recortes presupuestales en los programas del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), incluyendo los que refieren a la atención a víctimas por violencia de género¹⁸.

Algunas reflexiones finales

En información divulgada por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) de Uruguay el 18 de mayo, el país contaba con 737 casos positivos, 569 recuperados, 148 pacientes cursando la enfermedad y 20 fallecidos por Covid-19. Hasta el momento, el país enfrentó la crisis sanitaria a partir del “quédate en casa” y con un escenario que ya permite visualizar el aumento de las desigualdades sociales. En primer término, conviene señalar que no apagar los “motores de la economía” fue y sigue siendo la premisa presidencial para decidir quienes se quedan y quienes no se quedan en casa. Pero también se aprecian otras señales muy claras: realizar la zafra de soja (con un dólar en aumento desde que asumió el nuevo gobierno), la construcción de la nueva planta de celulosa o el tren que garantiza su construcción resultan imprescindibles.

En cambio, no se pone énfasis en garantizar la continuidad de los Consejos de Salarios (negociación tripartita entre Estado, empleadores y sindicatos) que fue una de las principales herramientas de redistribución económica y diálogo social de la sociedad uruguaya durante los últimos 15 años. Pareciera que dentro de los desafíos que el nuevo contexto determina, garantizar tripartitamente las condiciones para que actores laborales den respuestas a los desafíos del futuro del trabajo no está dentro de los planes de atención a la situación de pan-

¹⁸ En la primera quincena de marzo, en un lapso de diez días, hubo cuatro femicidios. Ref: <https://feminismos.ladiaria.com.uy/articulo/2020/3/feministas-reaccionan-ante-dichos-de-lacalle-pou-que-califican-los-femicidios-como-un-efecto-colateral-del-aislamiento-social-por-el-coronavirus/> (19-5-2020)

demia¹⁹. En ese sentido, la LUC intenta cambiar reglas de juego en las medidas de presión disponibles por parte de los trabajadores, más específicamente en las de huelga y ocupación.

En segundo término, la “nueva normalidad”, como gusta llamarse desde esferas oficiales y medios de comunicación a la situación actual, supone entonces la naturalización de diferencias, la imposibilidad de la organización y la protesta, la particularización de las situaciones laborales y educativas, y la apelación de la “solidaridad” en detrimento de la falta de atención y sensibilización de otros fenómenos relevantes para la sociedad (por ejemplo, la violencia de género). En ese sentido, desde nuestros lugares académicos se vuelve necesario cuestionar las bases de la “nueva normalidad” y su construcción moral para generar nuevas miradas hacia una sociedad alternativa.

¹⁹ Sobre este punto es interesante las reflexiones del abogado laboralista Hugo Barreto <https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/5/los-consejos-de-salarios-a-la-deriva-entre-la-confusion-y-la-mendacidad-de-siempre/> (18-5-2020).